



El tripartito avanza en el plan de educación para la paz entre críticas de grupos sociales

Bakeaz, Gesto por la Paz y Covite dudan de su eficacia para deslegitimar a ETA

IGNACIO MEDRANO VITORIA

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco avanza en la elaboración del Plan de Educación para la Paz, del que se conocen un texto de presentación y un borrador que han sido corregidos y ampliados con un nuevo documento de 200 páginas que será remitido en breve a la Ponencia del Parlamento vasco. «Una de las prioridades del plan es la deslegitimación de ETA», recalcó ayer Jon Landa, responsable de esta dirección adscrita a Justicia. Sin embargo, la manera en la que el Gobierno autonómico intenta llevar a cabo esta labor sigue siendo muy cuestionada en diferentes ámbitos políticos y sociales.

Así volvió a ponerse de manifiesto ayer, en Vitoria, en la mesa redonda organizada por la Fundación Fernando Buesa en el marco de sus jornadas sobre 'La promoción de los valores democráticos en la Educación'. El director de Bakeaz, Josu Ugarte, el representante de Gesto por la Paz, Itziar Aspuru, y el miembro del colectivo de víctimas del terrorismo Covite Ángel Altuna demandaron una mayor claridad en este plan. A falta de conocer la última versión elaborada por Derechos Humanos, Ugarte, Aspuru y Altuna coincidieron con distintos matices en que la experiencia presenta déficits de enfoque, contenido y concreción para abordar con eficacia la educación para la paz teniendo en cuenta el contexto de violencia terrorista que sufre el País Vasco. Ugarte fue más lejos al pedir una «moratoria» en la iniciativa, que no está «madura» y requiere un «diagnóstico previo» de la realidad que, a su juicio, no se ha hecho.

En ambos extremos de la mesa, Landa y el adjunto a la Dirección de Atención a las Víctimas, Txema Urkijo, defendieron que, a pesar de sus deficiencias, el plan constituye un avance. «Es mucho más importante saber que se están dando pasos en la dirección correcta que dar pasos con excesiva premura», proclamó Urkijo.



Los participantes en la mesa redonda, con el moderador Jesús Loza (derecha). / NURIA GONZÁLEZ

Los tres colectivos censuran que el nacionalismo asocie los conceptos de paz y normalización

Jon Landa, que insistió en que la intención del Gobierno vasco es llevar adelante este proyecto «con el máximo consenso posible» de las fuerzas políticas, defendió lo ya realizado. En este sentido, se refirió al polémico plan piloto que se llevó a cabo el curso pasado entre alumnos de cuarto de la ESO de seis centros escolares como un marco general de educación en derechos humanos, que trataba el terrorismo como un capítulo más entre otras manifestaciones de violencia. Landa destacó que la evaluación que ha hecho la UPV de esta iniciativa -cuyos resultados serán publicados en breve- pone de manifiesto

que los alumnos participantes tienen ahora «una mayor sensibilidad con respecto a las víctimas, también las del terrorismo».

Educación pondrá en marcha un nuevo plan piloto, centrado ya en los damnificados por la barbarie terrorista, en la segunda mitad de este curso. Según recalcó ayer Urkijo, se abre así «la posibilidad de que las víctimas» comparezcan en las aulas, una vieja reivindicación de la oficina de Maixabel Lasa que originó un desencuentro, ya superado, con Derechos Humanos. Esta experiencia será llevada a cabo con la unidad didáctica 'Historias que nos marcan', uno de cuyos autores, Josu Ugarte, lamentó ayer que Educación haya tardado más de dos años en ponerla en marcha.

La televisión pública

Aunque el plan que desarrolla el Gobierno vasco está centrado en los centros escolares, tanto Urkijo como los representantes de las organizaciones sociales presentes

en la mesa destacaron que la educación para la paz debe trascender de la escuela hacia otros ámbitos. Altuna criticó, en este sentido, a EITB: «En el programa de telerrealidad 'El conquistador del fin del mundo' uno de los concursantes colocó un cartel en el que ponía, 'sin amnistía, no hay paz'. Aunque el programa estaba editado, EITB no impidió que saliera en pantalla». El concursante en cuestión fue elegido posteriormente por la audiencia como el más popular. Lo que, según apostilló Aspuru, sirve como termómetro para medir hasta qué punto hay que trabajar todavía en la sociedad vasca para deslegitimar la violencia.

Los miembros de Covite, Bakeaz y Gesto criticaron que desde el Gobierno vasco y el nacionalismo en general se sigan estableciendo lazos entre pacificación y normalización política. «Esta es una sociedad lastrada por el causalismo», sentenció Altuna.

■ i.medrano@diario-elcorreio.com

El presidente del Parlamento de Irlanda del Norte visita la Cámara vasca

EL CORREO VITORIA

El presidente del Parlamento de Irlanda del Norte, William Hay, visitó ayer la Cámara vasca y mantuvo una serie de reuniones con todos los grupos políticos que cuentan con representación en el hemiciclo.

El representante de la asamblea legislativa de Irlanda del Norte, que compareció ante los medios de comunicación junto a su homóloga vasca, Izaskun Bilbao, aseguró que la visita no tiene una motivación política, sino que su objetivo es «aprender y escuchar» a los distintos partidos. Hay explicó que existen, al mismo tiempo, «paralelismos y diferencias» entre su país y Euskadi. En este sentido, tras manifestar que el verdadero reto del Parlamento irlandés en la actualidad «es el crecimiento económico», afirmó que una de las principales diferencias entre los dos territorios es que en Irlanda hubo un acuerdo político que hoy sigue adelante y que llegará a buen puerto porque cuenta «con el apoyo de todos los grupos».

La presidenta de la Cámara vasca, por su parte, le transmitió su esperanza de que, en los próximos meses, se pueda conseguir «la unanimidad de todos los partidos» políticos. En esta misma línea, Bilbao también expresó su deseo de que «ETA anuncie el abandono definitivo de la violencia» y de que, «dentro de seis meses, podamos estar en una mejor situación de la que nos encontramos en estos momentos».

La presidenta indicó que, según palabras del propio Hay, «las claves» para lograr la paz en Irlanda del Norte fueron que las partes «entendieron» que no iban a conseguir sus objetivos «al cien por cien» y que «el acuerdo unánime de todos los partidos» resulta fundamental para lograr el fin de la violencia.

DERECHO A PRUEBA

Se ha tildado de beligerante y de extravagante la prueba testifical pedida por la defensa del lehendakari en la que solicita se cite, entre otros, al presidente Rodríguez Zapatero y al ex presidente Aznar, al actual ministro de Interior Rubalcaba y al ex ministro Mayor Oreja. Se ha dicho que con ello se busca la politización de la causa y la deslegitimación de la Justicia. Sin embargo, lo primero que hay que resaltar de la petición es que está ejerciendo su legítimo derecho a proponer la prueba

que considere más idónea en defensa de su inocencia y de sus intereses procesales, que no son otros que dejar acreditado que el diálogo con los representantes de Batasuna y de ETA nunca fue objeto de persecución penal por los tribunales españoles.

No lo fue para los representantes democráticos que autorizaron los encuentros con ETA ni tampoco para quienes defendieron y practicaron el diálogo con Batasuna. Como tampoco se ha inculcado a los responsables de los medios de comunicación por dar

cuenta de las actividades, propuestas y pronunciamientos realizados por los dirigentes de Batasuna, no sólo tras su legalización, sino también tras la suspensión de actividades de Batasuna dictada por Garzón en el 2003, donde se acordó dirigirse a los diferentes medios de prensa. La pertinencia de la prueba solicitada será examinada por la Sala de lo Penal competente, y será este tribunal quien resuelva sobre la misma a la luz del principio constitucional de la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de todas las per-

sonas a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

Destacar el perfil político de los testigos propuestos para deducir de ello una pretensión de politización de la causa es olvidar ingenuamente o silenciar conscientemente el origen netamente político del reproche penal que ahora se pretende. En esta causa, desde el inicio, se está pretendiendo ventilar algo más que una supuesta responsabilidad penal. Diría más, el reproche penal es lo de menos, lo que realmente se persigue es la censura política. Esto es eviden-



XABIER GURRUTXAGA

te, no sólo por el carácter político de las asociaciones que ejercen la acusación popular, exponentes de una oposición radical a la política de Ibarretxe, sino también por el dato relevante de la falta de acusación por el Ministerio Fiscal que ha expresado la inexistencia de delito en los comportamientos políticos objeto de enjuiciamiento.

Hace años que el Supremo se pronunció contra este tipo de procedimientos al señalar que «es inaceptable que se utilice la vía penal para dar solución a otros conflictos, que en su caso, han de tener acogida en otros órdenes jurisdiccionales». Lo ha vuelto a decir con motivo de la querrela de Manos Limpias contra Zapatero por autorizar a López a reunirse con Batasuna, donde puso